

EL PRI: UN PARTIDO A LA DEFENSIVA

JACQUELINE PESCHARD

Introducción

Después de 1968, los estudiosos de la política mexicana, tanto nacionales como extranjeros, empezaron a hablar de la crisis del partido oficial. Centrados en temas tales como la pérdida de legitimidad, los límites de la eficacia del Revolucionario Institucional, sus fisuras internas y los obstáculos para su modernización, dichos estudios dieron cuenta de una preocupación compartida ante los horizontes inciertos de un partido que ha sido pieza clave de la prolongada continuidad institucional de nuestro país.¹

Hoy, la profundidad de la crisis económica y sus amplias repercusiones, que todavía no alcanzamos a calibrar plenamente, han hecho de la crisis el tópico obligado de toda reflexión sociológica en México. Las discusiones recientes sobre el PRI no escapan a esta influencia y aquellos viejos temas que se esbozaron en el decenio pasado han cobrado relevancia a la luz de las circunstancias económicas actuales.

De esta suerte, a los problemas del PRI, latentes por largo tiempo, se han venido a sumar los efectos de la crisis económica, haciéndolos claramente manifiestos. A pesar de que subsisten políticos obstinados en negar la crisis del PRI, siguiendo la tradición triunfalista del discurso oficial, hay signos claros de fallas, desajustes, quiebras y desgastes que reclaman cambios a toda costa. Esta necesidad ya ha sido reconocida por el liderazgo priísta al punto que 1984 ha sido un año dedicado por entero a preparar lo que se anuncia como la restructuración del PRI.

A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por definir la crisis política, por señalar sus condicionantes desde una óptica más allá del solo reflejo de la crisis económica, poco se ha explorado en cuanto a una caracterización específica de la crisis del PRI, es decir, de los problemas que le son propios y que, por tanto, se expresan en campos precisos. Una caracterización de este tipo permite comprender los

¹ Destacan entre esos estudios: Hansen (1971); Camacho *et al.* (1977); González Casanova *et al.* (1979); González Casanova (1981); Molina *et al.* (1982).

desafíos que tiene ante sí el PRI y las soluciones que puede proponer.

Parece que ya nadie niega que existe una falta de credibilidad en el sistema político, que las impopulares medidas económicas que se han adoptado, aunadas a la corrupción en los manejos de la cosa pública, que alcanzara niveles insultantes durante el régimen pasado, han hecho caer la confianza de la ciudadanía en la capacidad y voluntad de los gobernantes para resolver los problemas. Y esto es extensivo al PRI por ser el partido del gobierno. Aunque es cierto que ambos adolecen de una disminución en sus bases de legitimidad, cabe hacer un esfuerzo por deslindar aquello que es proyección de las fallas del sistema sobre el partido, de lo que son fallas propias del partido y que provienen de su misma estructura y funcionamiento.

El problema al que uno se enfrenta para deslindar y designar la crisis del PRI proviene de su naturaleza misma, es decir, de la estructura, principios ideológicos, composición y tipo de liderazgo que lo configuran. Su carácter de partido del Estado imposibilita su análisis como entidad aparte. Sin embargo, su ligamiento con el aparato estatal del gobierno, que lo ata indiscutiblemente a la suerte de éste, de ninguna manera lo confunde con él, ya que tienen facultades y funciones diferentes.

Con esto en mente, considero que para incursionar en la caracterización específica de la crisis del PRI es indispensable tomar como punto de partida su carácter intrínseco, lo que lo hace ser el partido dominante, la pieza del sistema en donde se recrea el consenso del que goza, el símbolo de la unidad de dominio. Sólo a partir de esta perspectiva se puede vislumbrar hacia dónde se dirigen los cambios que seguramente se introducirán y que buscan reforzar y no violentar su esencia.

Considero que la crisis particular del PRI puede sintetizarse en dos grandes líneas problemáticas que están íntimamente vinculadas, que reflejan problemas estructurales y que tienen que ver, una, con su vida interna y su inserción en la sociedad civil y, otra, con su relación con el poder: 1) crisis de movilización y 2) crisis de articulación con el gobierno.

1 La crisis de movilización

Una de las críticas más recurrentes al PRI en los últimos años ha insistido en que es un partido electorero, que ha dejado de cumplir con tareas de educación política, de distribución de poder y de riqueza y

que ha quedado reducido a sus funciones de ganar las elecciones y de frenar la competencia de partidos de oposición (Córdova, 1979: 386). Y es que los momentos electorales, con los tiempos y ritmos propios del sistema mexicano, son los termómetros más evidentes del nivel en que se encuentra la conflictiva política.

Los problemas a los que se enfrentó el PRI en 1983 en el campo electoral y las predicciones para las elecciones federales de 1985 han volcado a sus dirigentes sobre los preparativos de la XII Asamblea Nacional en la que se expondrán y aprobarán las modificaciones que sufra. A pesar de que la disminución en los votos captados por el PRI no se reduce a las elecciones locales del año pasado, ya que desde mediados de los años sesenta el abstencionismo empezó a aumentar progresivamente hasta hacer las victorias priístas secundarias frente a las del "partido de evasión", no ha sido sino hasta ahora, frente al ascenso del PAN, que el PRI ha tenido que reconocer que ha perdido terreno y que ya no puede responder con medidas laterales.

En efecto, los triunfos del PAN, particularmente en cinco municipios capitales de Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua, la violencia que se desató ante los fraudes electorales y la falta de reconocimiento a triunfos de la oposición, pero sobre todo la movilización que logró orquestar el PAN en alianza con grupos empresariales y el clero en los estados del norte en 1983, capitalizando el descontento hacia el partido oficial, mediante consignas tan poco elaboradas como "por un gobierno de gente decente", han dado constancia de la inoperancia de los mecanismos de movilización del partido del Estado, que otrora constituyera una de sus virtudes más destacadas.

Y no es que la pérdida de capacidad movilizadora sea reciente, lo que sucede ahora es que un partido con voz y cara definidas le disputa esa capacidad, llegando actualmente a plantearse que se está configurando un bipartidismo en México. Los conflictos políticos que se acumularon durante los años setenta: el abstencionismo, el surgimiento de la insurgencia sindical, la proliferación de partidos y asociaciones políticas, la aparición de la guerrilla urbana y rural fueron signos evidentes de la presencia de demandas sociales irreductibles a los cerros de la movilización oficial. Sin embargo, ninguno de los partidos políticos pudo capitalizar dichas expresiones políticas y la hegemonía priísta resistió en el mar de las acechanzas.

La reacción frente a esos conflictos vino del gobierno, quien promovió la reforma política prácticamente al margen de su partido para ampliar y legalizar la participación político-electoral de partidos de oposición y con ello revitalizar al sufragio como la institución en que se recrea la fundamentación popular del poder. Con todo y que el

PRI como brazo partidario del Estado era corresponsable de las situaciones que motivaron la reforma política, la vivió como algo externo.² Es por ello que en el corto plazo, al menos, la reforma benefició al régimen porque reforzó su imagen pluripartidista y alentó la participación electoral, pero debilitó al partido porque sus fallas se hicieron más notables.³ La apertura de espacios para la disidencia flexibilizó el juego político, chocando con las estructuras rígidas del PRI. Es explicable, entonces, que la única institución que presentó una alternativa a la reforma política haya sido precisamente la CTM con su proyecto de reforma económica, planteado desde su Asamblea de 1978.

Uno de los factores que ha mermado la capacidad de movilización del PRI en el ámbito electoral es el que se refiere a los métodos de selección de los candidatos a elección popular.

En sus orígenes, el partido de la Revolución se enfrentó al reto de implantarse a nivel nacional, para lo cual tuvo que buscar penetrar en las regiones y localidades donde imperaban focos de poder centrífugos, renuentes a someterse al dominio central. Para lograrlo, el partido instauró la práctica de localizar a los líderes y grupos con influencia en la localidad, hacerlos suyos, postularlos como candidatos oficiales con lo cual aseguraban la negociación con el partido. Esta práctica hizo del partido un organismo basado en alianzas con caciques regionales.

A medida que el partido fue consolidando su predominio nacional y a la par que se iban centralizando y burocratizando las decisiones internas, esta práctica se ha ido perdiendo, entrando en pugna no sólo con focos de poder regional, sino sobre todo violentando formas de vida y de relación política de las localidades, ya que donde existen líderes naturales, populares y muy apoyados, el PRI hace caso omiso de las presiones privilegiadas del gobierno estatal, o incluso federal, o de la cúpula priísta. Esta práctica se ha considerado como imposi-

² El PRI participó en las consultas promovidas por la Comisión Federal Electoral, apoyando la convocatoria presidencial para impulsar la reforma política, pero lo hizo para justificar la falta de pluralismo político por la incapacidad de otros partidos para atraer el interés de los ciudadanos y para reafirmar el poder de decisión como feudo propio al que no tendrían acceso las minorías. Cf. *Tercera Audiencia Pública de la Reforma Política*, CFE, tomo I, 1977, p. 82-87.

³ Las elecciones de 1982, las primeras elecciones presidenciales después de la reforma política, se desarrollaron en un ambiente de efervescencia debido a la presencia inaudita en México de siete candidatos apoyados por partidos nacionales legalmente registrados. El abstencionismo disminuyó al 23% y De la Madrid arribó al poder con mayor consenso que sus dos antecesores. Además, el PAN, el partido de oposición con más larga trayectoria electoral obtuvo 4 millones de votos, la cifra más elevada de su historia.

ción del centro, violatoria de la soberanía estatal, que es un tema que ha vuelto a cobrar vigor. A manera de ejemplo, baste recordar la forma como fueron seleccionados los 15 candidatos a los gobiernos de los estados en 1979, en donde el criterio que privó fue la cercanía personal al jefe del Ejecutivo.⁴

Ya durante el régimen actual resaltan los casos de la selección de candidatos a presidente municipal en municipios de Baja California, Guanajuato y Tamaulipas, donde miembros de la familia priísta con probado consenso popular no alcanzaron la candidatura oficial, teniendo que acogerse a otros partidos o presentándose como candidatos independientes para competir y ganar las elecciones.⁵

Al tomar el terreno electoral para ejemplificar la pérdida de capacidad de movilización del PRI estoy considerando el ámbito más evidente de la discusión. En efecto, el PRI, en su versión institucionalizada, fue concebido como una maquinaria electoral abocada a garantizar la transmisión pacífica del poder y borrar así los vestigios de las prácticas pretorianas que acompañaron a las largas épocas del caudillismo. En este sentido, el PRI tuvo como cometido erigirse en emblema de la institucionalidad del poder. Ante la ausencia de competencia electoral y de alternancia en el poder, el PRI pudo cumplir con las exigencias de continuidad y cambio de todo sistema que se reclama democrático mediante la fórmula de la no reelección, ley de hierro de la política mexicana contemporánea, que ha preservado el sentido de la transmisión del poder y las expectativas de movilidad política.

Pero el PRI no ha ganado las elecciones por vía de la participación ciudadana sino de la movilización de organizaciones sociales que conforman sus contingentes y que, como ha dicho Arnaldo Córdova, son los verdaderos protagonistas políticos de nuestro país. (Córdova, 1979: 389). Y es que la participación ciudadana es propia de sistemas modernos cuya vida política está marcada por una información y educación políticas extendidas que corren paralelas a una cultura política participativa, celosa de su derecho de tener injerencia en la designación de sus gobernantes.

A pesar de que ése es el modelo formal al que aspiramos, las reglas que todavía hoy rigen nuestra vida política son atrasadas y se basan fundamentalmente en una movilización auspiciada y controlada por el poder y que desde el gobierno cardenista articuló al partido oficial

4 De las 15 gubernaturas que se disputaron, fuera del caso de Michoacán en que fue candidato Cuauhtémoc Cárdenas por el peso simbólico de su apellido, las demás favorecieron a amigos del Presidente.

5 En Baja California, el PST apoyó como candidato a presidente municipal a un ex presidente municipal priísta. En Tamaulipas y Guanajuato ex priístas se acogieron a candidatos independientes y triunfaron.

a los proyectos gubernamentales y a los sujetos de dichos proyectos. Esta movilización encaja dentro de una cultura política que se tipifica como "súbdito", en la que hay una aceptación básica de la autoridad política por el solo hecho de serlo (Almond, 1965: 17-18), y que es propia de países donde la vida política está caracterizada por una fuerte dosis de paternalismo.

La fuerza movilizadora del partido oficial se fue construyendo como una necesidad del Estado posrevolucionario de sellar su pacto social con las masas populares. Dicha capacidad se fundó en un mecanismo que Robert Scott ha denominado de "integración-conjunción" y que permitió incorporar dentro del partido a las fuerzas populares organizadas, sumándolas, corporativizándolas y equilibrándolas entre sí para permitir su convivencia y desalentar su posible fusión y acumulación de fuerzas (Scott, 1982: 49).

Esta incorporación al partido oficial de las organizaciones de masas obreras y campesinas, implantada durante el régimen cardenista, fue dándole a su capacidad movilizadora un perfil especial, ya que quedó indisolublemente ligada a las necesidades del aparato estatal. El partido movilizaba a sus sectores o corporaciones en apoyo a los dictados y políticas gubernamentales y no en función de los intereses que representaba, pero a cambio obtenía grandes márgenes de incidencia sobre las políticas en las cuales sus intereses estaban involucrados.

Desde luego que el sentido profundo de la movilización no era el ganar las elecciones, sino dotar al gobierno de una fuerza consensual que le otorgara gran capacidad de maniobra para llevar a cabo el proyecto estatal. En última instancia, era el potencial del Estado lo que estaba en juego.

Posteriormente, el proceso de desarrollo económico que emprendió el país generó una diferenciación social que dio pie al surgimiento de nuevos grupos sociales, sobre todo del sector terciario, a los cuales el partido oficial abrió sus puertas e integró al llamado sector popular, ampliando con ello sus alcances movilizadores.

Sin embargo, frente a las exigencias del proceso de desarrollo económico, la movilización del partido social fue retrayendo su ofensiva, reduciendo sus miras hasta convertirse en sancionadora disciplinada de los proyectos de crecimiento capitalista. Sometida a la guía de las burocracias sindical y partidaria, que se erigieron en los representantes legítimos de las masas organizadas, la capacidad de movilización se transformó en una reserva de poder casi personal de esas burocracias que lograron mantener la filiación de sus bases mediante la obtención de reivindicaciones económicas inmediatas.

La estructura del partido oficial fue adoptando los rasgos de la estructura de poder en su conjunto. La centralización del poder, que

fue condición necesaria de la formación del Estado posrevolucionario y que se tradujo en predominio indiscutible del Poder Ejecutivo fue permeando al partido que se fue jerarquizando, haciendo preponderante su eje vertical de dirección y control, alejando a la cúpula partidista de sus bases de movilización. El proceso de burocratización que fue experimentando el Estado mexicano, obsesionado por administrar todo, se reflejó también en la estructura del partido.

A lo largo de sus cuarenta años de vida, la movilización cautiva, controlada y dirigida por las burocracias sindical y partidaria logró su cometido de anular toda movilización independiente de la sociedad civil. Sin embargo, a raíz de los conflictos económicos, políticos y sociales que estallaron durante el decenio pasado, la sociedad civil ha empezado a despertar de su largo letargo y han surgido a lo largo y ancho del país una serie de organizaciones y movimientos sociales que no solamente se rehúsan a caer bajo el abrigo estatal sino que están renuentes a ser presa fácil de manipulación de líderes.⁶ Ése es quizás el eslabón más débil de la forma de movilización priísta, el de su liderazgo que probó ser eficaz para mantenerla bajo control, pero que es sumamente personalista y paternalista, que protege a los que acatan sus reglas, pero que sataniza a voces discordantes y que ha ido cayendo en vicios y complacencias que chocan con cualquier empuje modernizador de las formas de hacer política.

De ahí que los afanes renovadores con los que se inició el gobierno actual de Miguel de la Madrid hayan planteado la necesidad de incrementar la movilización popular, dar aires a la expresión de las demandas de los diversos grupos sociales, topándose por un lado con el temor a que dichas demandas escapen a los mecanismos de control político y, por otro, con la rigidez del liderazgo tradicional para el cual todavía no existe sustituto visible.⁷

En el marco de un liderazgo que se resiste a la modernización y de conglomerados sociales que han sido golpeados por la crisis y que buscan canales de expresión a sus demandas, el sector que ha dado muestras fehacientes de su renuencia a las fórmulas movilizadoras del PRI es el de las clases medias, esa capa social que fue una de las grandes beneficiarias del llamado milagro mexicano; que vio satisfechas sus aspiraciones de movilidad social por un ascenso continuo de sus niveles de consumo económico y cultural. Estos sectores medios, neta-

6 Son ejemplos de estas organizaciones las coordinadoras campesinas, los movimientos de colonos, de ecologistas, en fin, de lo que hoy se denomina movimientos sociales.

7 Cabe recordar que durante los años setenta, los liderazgos del SME y del sindicato de telefonistas con sus procesos democratizadores dentro de márgenes institucionales apuntaban en esa dirección.

mente individualistas y siempre políticamente oportunistas, sin haber sido los más afectados por la crisis económica sí han sido los que han sufrido los golpes más duros en sus expectativas y son los más abiertamente descontentos. Son sectores que no votan por convicción ideológica, que no se guían por principios, sino por la ley de la mayor oferta y que son los que históricamente han sido capaces de orquestar la desestabilización de un régimen de Derecho que no ha respondido a sus aspiraciones.

El punto más frágil de la capacidad de movilización del PRI son estas clases medias, ya que aunque algunos de sus grupos forman parte de la CNOP, ésta no es una corporación de clase media, ni por su composición heterogénea en la que se inscriben los que no tienen cabida en los otros dos sectores ni por su orientación que responde básicamente a los intereses de organizaciones de asalariados del Estado.

Esta categoría social que ha sido el "talón de Aquiles" del partido oficial ha recibido toda la atención del sistema, sobre todo las clases medias urbanas. Las reformas en los terrenos político y electoral de los últimos 20 años han estado dirigidas a atender sus demandas de participación.⁸ Es más, el discurso oficial ha ido modificando sus referencias tradicionales a los obreros y campesinos para contemplar a los grupos medios profesionistas y urbanos. Y es que el efecto simbólico del discurso tiene gran peso sobre las clases medias, pero es ahí también donde se desgasta más rápidamente un discurso sin correspondencia inmediata en las medidas políticas.

Dentro de la población urbana, el grupo que es naturalmente refractario a la movilización priísta es el de los jóvenes. A pesar de que desde 1973 el PRI les ha reservado un espacio para su organización en el MNJR, cuyo representante forma parte del CEN priísta, nunca ha constituido una fuerza de movilización efectiva ni cuantitativa ni cualitativamente. Sin embargo, durante más de cuatro décadas la presión juvenil fue neutralizada mediante una extensa oferta educativa que consumaba las expectativas de ascenso social de dicha capa de la población. La severa crisis económica actual ha reducido los recursos destinados a ese renglón y las perspectivas de empleo para esa generación son poco esperanzadoras. Las aspiraciones de mejoramiento en los niveles de vida de los jóvenes se han constreñido y la represión política que han padecido en los últimos 15 años los ha refundido en un escepticismo frente a cualquier movilización de tipo institucional.

A esto se debe, quizás, que durante los trabajos preparatorios de la XII Asamblea Nacional priísta la labor que realiza la organización

⁸ La reforma política tuvo un carácter profundamente urbano, estaba dirigida especialmente a esos sectores sociales. Cf. González Casanova (1979:47).

de la “juventud revolucionaria” haya sido objeto de severos cuestionamientos, llegando incluso a plantearse su disolución a fin de borrar vicios y fallas y proponer una nueva forma de atraer y organizar a los jóvenes que constituyen el 60% de la población y un capital electoral decisivo.

El dilema del PRI está en cómo canalizar el potencial movilizador de la sociedad sin tocar su estructura y liderazgo sectorial, cómo modernizarse para adecuarse a una sociedad que poco tiene que ver con la de los años treinta sin alterar su fisonomía ni perder su hegemonía.

2 La crisis de articulación con el gobierno

Surgido desde el poder para conservarlo y acrecentarlo, el partido oficial ha tenido una vida cuyas vicisitudes han dependido del estado que guarda su relación con el gobierno en turno. La articulación del PRI con el gobierno es inherente a nuestro sistema político; sin embargo, conlleva una contradicción: ya que los gobiernos cambian y por ello son más ágiles, están mejor lubricados, el PRI permanece a su lado con la misión de garantizar la continuidad del sistema, lo cual lo ha empujado a cerrarse y refugiarse dentro de sus confines y privilegios.

Uno de los puntos básicos de esta articulación es el nexo del partido con la burocracia política.

Desde su nacimiento, el partido estuvo llamado a ser el órgano de captación, formación, integración y legitimación de la burocracia política. La pertenencia a la misma era inconcebible sin la bendición del partido de la Revolución. Dadas las distintas facciones que reclamaban el legado revolucionario, el partido se abocó a aglutinarlas y cohesionarlas a fin de impedir desmembramientos y contradicciones insalvables que pudiesen provocar escisiones en el ejercicio del poder.

En contrapartida al carácter cerrado de la burocracia política del “antiguo régimen”, el partido de la Revolución simbolizó la apertura a las aspiraciones de movilidad política. En este sentido, fue muy generoso en cuanto al derecho de admisión, pero impuso sobre el personal político una disciplina férrea para asegurar la unidad de mando, indispensable para consolidar el aparato estatal posrevolucionario y alcanzar la siempre anhelada estabilidad política.

Esta cohesión de la clase política se logró, en parte, gracias a que el partido conjugó diversas fuerzas sociales y a que se erigió en el profesionalizador de la burocracia política. El PRI fue por muchos años el forjador de los altos cuadros dirigentes del país, independientemente

de su procedencia por vía de puestos de elección popular o de designación presidencial. La educación y el entrenamiento políticos se adquirirían en las filas del partido y constituían la preparación necesaria para ser miembro reconocido de la clase política, caracterizada por sus habilidades para medir consecuencias políticas de la toma de decisiones. Esto dio gran circulación a sus miembros, ya que prácticamente cualquiera era apto para ocupar cualquier puesto dentro de las ramas del gobierno y la administración pública.

Este ligamen de la burocracia política con el partido oficial proporcionó flexibilidad a la distribución de posiciones entre los distintos grupos políticos. Cuando con Miguel Alemán los civiles se adueñaron los puntos gubernamentales, la presidencia del PRI quedó reservada a figuras militares destacadas y esta práctica se mantuvo hasta bien entrados los años sesenta. De tal manera, Rodolfo Sánchez Taboada, Gabriel Leyva Velázquez, Agustín Olachea Avilés y finalmente Alfonso Corona del Rosal, con sus grados militares, presidieron el CEN del PRI desde diciembre de 1946 hasta diciembre de 1964.

Más tarde, los presidentes del PRI fueron prominentes hombres de partido con experiencia en cargos de elección popular. A pesar de que el PRI era ya declaradamente un instrumento del poder presidencial, se siguieron respetando ciertos márgenes de negociación interna del partido y el gobierno, es decir, se mantuvo un equilibrio entre la pactada subordinación del PRI al gobierno y el reconocimiento de éste a ciertas reglas de la filiación priísta. El gobierno de López Portillo rompió por primera vez con dicho equilibrio y la dirección del PRI cayó en manos de figuras cuyo mérito político era la amistad con el titular del Ejecutivo. Son representantes de este caso Gustavo Carvajal y el actual líder priísta Adolfo Lugo Verduzco.

Esta práctica, que denota el ahondamiento de la centralización de las decisiones sobre el personal político, ha desvirtuado el sentido de la militancia priísta, ha provocado divisiones en la burocracia política y desajustes en la articulación del PRI con el gobierno.

Por otra parte, el proceso de expansión y complejidad creciente del Estado mexicano, que no le es privativo sino que es una tendencia generalizada en el mundo occidental, su creciente intervención y control sobre campos estratégicos de la economía así como sobre terrenos claves de la vida social, fueron reclamando cambios en la calificación de la burocracia política.

La exigencia de especialización en los manejos de la cosa pública justificó el ingreso de los técnicos a la burocracia política.

Su diferenciación respecto de los políticos tradicionales proviene de su preparación educativa, pero particularmente de su trayectoria profesional y política. Mientras los técnicos entran en contacto con

el quehacer político por medio de responsabilidades dentro de la administración pública, los políticos que corresponden a la vieja guardia se forjan en cargos dentro del partido, o en aquellos promovidos por el mismo.

Según Roderic Camp, uno de los especialistas en el tema, el ascenso de los técnicos ha sido el cambio más significativo en el liderazgo político mexicano (Camp, 1982: 61). El avance de los técnicos se ubica en las altas esferas de la estructura burocrática, que es donde existe mayor fluidez y movimiento en los puestos por estar sujetos a la designación presidencial y de los secretarios de Estado, así como donde están puestas las esperanzas de movilidad política.

Frente a este fenómeno de tecnificación, el PRI ha quedado a la zaga, ya que sus estilos de hacer política y los intereses que han cobijado no se han adecuado a las nuevas exigencias del ejercicio administrativo, que ha empezado a imponer reglas sobre el proceso de toma de decisiones.

La administración pública se ha convertido en su propio forjador de cuadros, despojando al PRI de su exclusividad. El hecho de que por esa vía se haya alcanzado el puesto más elevado de la Presidencia de la República no sólo ha dado preponderancia al grupo de los técnicos, sino que ha ensanchado las facultades presidenciales en el campo de la selección del personal político.

En efecto, según datos de Aguilar Camín, los puestos de primer rango que dependen directamente del nombramiento presidencial han aumentado en los últimos 10 años, de 6 000 a 10 000 (Aguilar Camín, 1984). Este contingente que forma la burocracia del Ejecutivo está virtualmente exento de compromisos no sólo económicos sino ideológicos y, sobre todo, de militancia con el PRI. No es gratuito, entonces, que una de las demandas más destacadas durante los tres meses de consulta previos a la XII Asamblea Nacional del PRI, haya sido la filiación obligatoria al Revolucionario Institucional de los hoy llamados servidores públicos y su responsabilización de ciertas tareas partidarias dentro de lo que Garrido ha llamado la "estructura directa" del partido.⁹ En esta lógica se inscribe la solicitud de la CNOP de implantar una "carrera de partido" que restituya al PRI su injerencia en la conformación de la burocracia política.¹⁰

La marginación del PRI en este aspecto no se refiere únicamente a los puestos que caen dentro de la atribución directa del titular del Ejecutivo, sino que es extensiva a los de elección popular, e incluso a

⁹ Esta solicitud se planteó al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid. La "estructura directa" del PRI se refiere a su organización seccional. Cf. Garrido (1982: 248).

¹⁰ *Excelsior*, 23 de julio de 1984.

los de responsabilidad partidaria. El Ejecutivo es el líder natural del partido oficial y el gran elector en la selección de los candidatos de elección popular; pero la negociación para dicha selección es cada vez más centralizada, de suerte que la función del PRI se ve frecuentemente reducida a cubrir los pasos y procedimientos de la campaña y la contienda electoral.

A pesar de la penetración de la centralización administrativa en la organización de la cúpula priísta, el viejo liderazgo político sigue manteniendo su monopolio dentro de la llamada "estructura indirecta" del partido oficial,¹¹ en los puestos directivos ocupados por los representantes de las organizaciones de masas afiliadas al PRI. A pesar de los intentos reiterados desde hace por lo menos tres sexenios por suplantarlo a dichos líderes, auspiciando enfrentamientos internos, subvencionando corrientes disidentes, aprovechando ambiciones políticas, o bien por la vía novedosa de la moralización de las acciones políticas, los gobiernos han tenido que ceder en sus afanes y reafirmar su reconocimiento y alianza con dichos líderes.¹²

Detrás de estas dos tendencias que conviven hoy dentro de la burocracia política está la pugna entre dos concepciones distintas acerca de la forma de hacer política, de los preceptos y propósitos que deben guiar la adopción de las políticas gubernamentales, así como de los alcances de las mismas: populismo *vs.* racionalidad administrativa.

El enfrentamiento entre estas dos concepciones refleja claramente la crisis de articulación del PRI con el gobierno. El ligamen entre estos dos aparatos estatales se expresó tradicionalmente en los programas gubernamentales inscritos en el marco de una política de masas cuyo discurso y referencia ideológica fuera el populismo. El gobierno actual, frente a la crisis, ha defendido la racionalidad administrativa como fórmula para lograr el óptimo aprovechamiento de los escasos recursos públicos, pero también para modernizar la dinámica de la política mexicana.

De la misma manera que dentro de la burocracia política conviven las dos formas de liderazgo, el técnico y el político, conviven también las dos concepciones sobre los propósitos de la dirección política y éstas son palpables dentro de la propia burocracia del Poder Ejecutivo. Esto se explica no sólo por la presencia de políticos experimentados dentro del gabinete presidencial, sino por el tipo de competencias que las distintas dependencias tienen asignadas, el tipo de problemas

¹¹ La estructura indirecta es la de los sectores, Cf. Garrido (1982).

¹² Resaltan los intentos de suplantarlo a Fidel Velázquez por Rafael Galván en los años sesenta y más tarde los intentos de enfrentar líderes dentro de un mismo sindicato como el petrolero y el electricista, o de enfrentar organizaciones como se vio recientemente entre la CROC y la CTM.

que deben resolver y, por último, el tipo de grupos sociales y políticos con los que interactúan directamente. De tal suerte, los funcionarios de dependencias bajo cuya responsabilidad está la negociación con demandas populares son más proclives a una posición si no declaradamente populista porque ello atentaría contra los propios planteamientos presidenciales, sí conciliatoria entre las dos concepciones polarizadas.

A pesar de la presencia de estas dos corrientes dentro del gabinete delamadridiano, las políticas generales del gobierno actual en los renglones económico y político responden a una lógica distinta a la del liderazgo sectorial del partido que se ha sustentado y legitimado en el populismo.

La política de austeridad y de contención salarial, implantada para abatir la inflación y recuperar la solvencia ante los organismos internacionales de crédito ha apostado a la sujeción fiel de las burocracias sindicales dentro del PRI y a su capacidad para impedir ser rebasadas por la desesperación de sus masas agremiadas. En este contexto, las demandas del movimiento obrero, que son las mejor articuladas por provenir del sector con mayor fuerza movilizadora, no han encontrado eco en los lineamientos de la política gubernamental, mientras que los grupos empresariales que no tienen un pacto sellado institucionalmente con el gobierno han visto incrementada su capacidad de presión sobre dichas políticas. Esta situación explica por qué la posición del sector obrero se ha ido radicalizando durante los últimos años. El gobierno ha congelado sistemáticamente las iniciativas de ley de la diputación obrera y ha ignorado las exigencias del Congreso del Trabajo en las negociaciones laborales.

En contrapartida, sí ha sido sensible a la ofensiva empresarial, al punto que esta situación se ha filtrado al partido oficial. Una de las propuestas más aventuradas, presentada durante la consulta sobre la restructuración del PRI ha sido la de incorporar a los empresarios como un cuarto sector, reivindicando la pluralidad y flexibilidad del partido.¹³ Ello implicaría alterar radicalmente los postulados ideológicos del partido de la Revolución; sin embargo, el hecho de que se haya planteado desde la propia directiva priísta refleja que los intereses empresariales cuentan ya con portavoces declarados dentro del PRI.

En lo que respecta al ámbito político, el gobierno actual se inició

¹³ Propuesta lanzada en el mes de julio por el dirigente del PRI en el estado de México, avalada por el gobernador de Nuevo León, dos estados en los que la fuerza de los empresarios es determinante. Posteriormente la propuesta fue apoyada por la CROC que en últimas fechas ha tenido fuertes enfrentamientos con la CTM.

evocando la modernización y democratización integral, impulsando reformas legislativas encaminadas a ampliar los cauces de representación y participación políticas. Con la modificación del Artículo 115 Constitucional se extendió legalmente la representación proporcional fijada por la reforma política a todas las localidades, estimulando la lucha electoral de la oposición en los municipios que es donde la manipulación electoral ha sido rechazada violentamente. Esto ha arrinconado al PRI, sobre todo en aquellas entidades donde ha tenido una oposición orquestada desde hace tiempo, forzándolo a echar mano de todos los artificios que le proporciona su carácter de juez y parte en los procesos electorales. Obligado a una posición defensiva, el PRI recurre a todo tipo de fraudes como la modificación de legislaciones locales, manipulación de padrones electorales y anulación de votos, entre otros.

Esta situación es una muestra palpable de una brecha entre el gobierno y el partido oficial que ha golpeado el corazón de su articulación. Se ha gestado una división en dos niveles: 1) entre la cúpula partidista ligada al Ejecutivo y la cúpula sectorial igualmente ligada al Ejecutivo, pero cuya supervivencia depende, además, de su capacidad para incidir en la orientación de las políticas públicas y obtener reivindicaciones para sus bases y 2) entre la nueva cúpula partidista que poco le debe al partido y los grupos intermedios del mismo en los que descansan las tareas cotidianas de operación del PRI.

Todos estos factores han hecho que el indisoluble vínculo del PRI con el gobierno sea cada vez más forzado, mientras que el vínculo informal de los empresarios con el gobierno se hace más estrecho.

Consideraciones finales

Las crisis de movilización y de articulación que caracterizan a la situación actual del PRI tocan el fondo mismo de su estructura y no pueden resolverse mediante cambios meramente formales.

Pero el PRI no está herido de muerte. Tiene a su favor los recursos del poder y la voluntad férrea de los intereses que se han pertrechado en el partido, sobre todo a nivel sectorial, pero también regional y que están dispuestos a dar la batalla para conservar sus privilegios. Cuenta también con sus contingentes disciplinados, más que por convencimiento por falta de opciones efectivas.

El gobierno y la cúpula priísta están empeñados en reestructurar al PRI para modernizarlo y adecuarlo a las nuevas circunstancias básica-

mente electorales que ha producido la reforma política y que exigen fundamentar mejor su reclamado carácter de partido mayoritario.

Un impulso renovador proveniente de las alturas y una estructura que se resiste al cambio, sumadas a unas bases desilusionadas y escépticas sólo pueden resultar en reformas de procedimientos que dejen intocadas las raíces del problema.

El liderazgo priísta ha convenido que la reordenación del PRI no requiere cambios en sus principios ni en sus postulados ideológicos. Se invoca la vuelta a sus orígenes. Y no como fórmula para fijar desde ahí nuevos rumbos y estrategias conformes con su naturaleza, sino como defensa obstinada de su inamovilidad.

A partir de este supuesto, los tres meses de consulta y las decenas de miles de ponencias presentadas hablan de un partido muy refugiado en su organización burocrática, pero muy desvinculado de sus bases. El diagnóstico y las grandes tesis enarboladas enfocan problemas medulares: ausencia de democracia en la vida interna, movilización pasiva, falta de contacto entre líderes y bases, falta de reconocimiento al trabajo partidista. Las propuestas sugeridas presentan un partido a la defensiva, obcecado y con escasa creatividad que ha abandonado su cometido de convencer y acumular fuerzas, para cobijarse en medidas coactivas en las que está ausente el compromiso y que encierran más al partido, como la filiación obligatoria de los funcionarios públicos al PRI y la expulsión de aquellos que no cumplan con sus tareas partidarias. Por otra parte, el PRI se ha enfrascado en experimentos sobre formas de seleccionar candidatos de elección popular que implican grandes esfuerzos, pero que no cuentan con la voluntad para acatarse. Cabe recordar el ensayo democratizador realizado en marzo pasado en Nayarit para elegir candidatos a presidentes municipales por la vía del voto de militantes, o el de "inscríbese quien quiera" llevado a cabo en julio en el estado de México.

Todo parece indicar que el PRI se halla imposibilitado para tomar la delantera del cambio y que se limita a reaccionar ante situaciones de hecho cuando éstas se tornan amenazantes para su monopolio.

Mucho se insiste en la necesidad de modernizar al PRI, de hacerlo un partido verdaderamente competitivo que aliente la participación ciudadana y que al asumir las riendas del gobierno ponga en práctica los programas que difunde. Esto exigiría su desvinculación del gobierno, su conversión en un partido de la sociedad civil, es decir, el fin del PRI.

Por lo pronto, los alcances del proceso de restructuración del partido oficial no podrán ir más allá de ciertas disposiciones normativas que sigan dejando un amplio margen de acción y decisión a sus focos de poder tradicionales.

Bibliografía

- Aguilar Camín, Héctor: (1984), "El sistema político mexicano 1940-1984", Primer simposio sobre historia contemporánea de México, 1940-1980, México, 23 de enero.
- Almond, Gabriel y Sidney Verba: (1965), *The Civic Culture*, Boston, Little Brown and Co.
- Camacho Manuel, Lorenzo Meyer, Soledad Loaeza *et al.*: (1977), *La crisis en el sistema mexicano*, México, El Colegio de México.
- Camp, Roderic A.: (1982), "Tecnocracia, representación y crítica", en Robert Scott, Volker Lerhr, R. Camp *et al.*, *Perspectivas del sistema político mexicano*, México, CEN, PRI.
- Córdova, Arnaldo: (1979), "La política de masas y el futuro de la izquierda", en González Casanova y Enrique Florescano (coordinadores), *México, hoy*, México, Siglo XXI.
- Garrido, Luis Javier: (1982), *El partido de la revolución institucionalizada*, México, Siglo XXI.
- González Casanova, Pablo: (1979), "La reforma política y sus perspectivas", en *Gaceta de la CFE*, México.
- González Casanova, Pablo y Enrique Florescano (coordinadores): (1979), *México, hoy*, México, Siglo XXI.
- González Casanova, Pablo: (1981), *El Estado y los partidos políticos en México*, México, ERA.
- Hansen, Roger: (1971), *La política del desarrollo mexicano*, México, Siglo XXI.
- Molina Piñeiro, Luis, R. Scott, R. Camp *et al.*: (1982), *Perspectivas del sistema político mexicano*, México, CEN, PRI.
- Scott, Robert: (1982), "La necesidad de actualizar el sistema político mexicano", en Robert Scott, Volker Lerhr, R. Camp *et al.*, *Perspectivas del sistema político mexicano*, México, CEN, PRI.